

# AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL

*La situación de El Salvador empeora día a día y ha llegado a límites de extrema gravedad. Gravedad no sólo estructural sino también coyuntural o, si se prefiere, activación de la gravedad estructural a nivel de conciencia colectiva y a nivel de las acciones cotidianas. La prueba más llamativa de esta gravedad constituye el número de asesinatos políticos, que bien puede alcanzar en este mes de septiembre —y sólo por lo que toca a este año— la cuota de ochocientos muertos. Lo cual nos sitúa en uno de los primeros puestos mundiales, si tenemos en cuenta la proporción entre las víctimas y el número de habitantes. Hay otros muchos indicadores de la gravedad, pero atengámonos para nuestro análisis al hecho de los asesinatos políticos, al hecho de esta marea de represión y subversión, que permite hablar de preguerra civil.*

*Los asesinatos políticos ponen de manifiesto la confrontación entre el Gobierno —y las clases que están tras él—, ayudado por fuerzas paramilitares y parapolíticas como ORDEN, UGB y agentes vestidos de civil y, en el lado opuesto, las organizaciones populares y los grupos guerrilleros. Sobre todo, las organizaciones populares como víctimas. Unas veces con el pretexto, contradicho por la realidad, de que los cuerpos de seguridad fueron provocados por disparos procedentes de las organizaciones populares y de los manifestantes; otras veces alegando que las víctimas colgaban mantas de propaganda o, más genéricamente, por el hecho de pertenecer a grupos populares y ser acusados por ello de guerrilleros, los cuerpos de seguridad y sus afines han dado muerte durante este año a cientos de ciudadanos. Así han caído decenas de maestros y sindicalistas y centenares de campesinos.*

*También los grupos guerrilleros han causado muertes, aunque en número muy inferior, la mayor parte de ellas entre miembros de los cuerpos de seguridad o cuerpos afines. Y no es que estos grupos guerrilleros hayan declarado guerra abierta o insurrección popular sino que se trata todavía de acciones esporádicas, sea como protección de sus simpatizantes o como hostigamiento de sus adversarios.*





*No hay signo alguno que permita esperar el cese de estos asesinatos, la tregua en esta incipiente guerra civil, que afecta directa o indirectamente a la marcha socio-política de toda la nación y a la mayoría de los ciudadanos. No hay tampoco esperanza alguna, al menos si no se plantea con claridad el orden de originación y de fundamentación, que se da entre la posición del Gobierno y la respuesta de los grupos armados. Sería, por ejemplo, miopía suicida pensar que, como el Gobierno representa la legalidad, sus acciones represivas son justas, mientras que las de sus oponentes, por ser ilegales, carecerían de toda justificación. Sería, por otra parte, insuficiente decir que la explicación no sólo última sino también inmediata del recrudecimiento de la violencia estriba en que el Gobierno defiende los intereses de las clases dominantes y del imperialismo norteamericano, mientras que sus contrarios defienden los intereses de las clases oprimidas, de modo que esa contradicción estructural se refleja ahora en la contradicción de la lucha armada. Esto puede ser verdad y debe tenerse como fondo explicativo para las medidas de largo alcance, pero no es lo que más ayuda a ver con claridad un camino inmediato de solución.*

*Parece más acertado enfocar el problema desde la intolerancia actual del Gobierno contra todo aquello que sea organización popular, sobre todo cuando ésta ha logrado un volumen considerable con independencia de los grupos guerrilleros, que las pudieran respaldar. El propio Viron P. Vaky, subsecretario de Estado para asuntos interamericanos reconocía el 11 de septiembre que el Bloque Popular Revolucionario contaba con un número de miembros que pudiera oscilar entre sesenta y ochenta mil. Esto sin contar a guerrilleros bien organizados y con grandes recursos económicos, cuyo número se acerca a los dos mil. A pesar de estas cifras y, sobre todo, a pesar de la importancia de las organizaciones populares, el Gobierno pretende la aniquilación de todo aquello que esté más a la izquierda de los partidos de oposición reconocidos. No es ya que las considere como ilegales, es que las sitúa indiscriminadamente como su enemigo principal.*



*Esta posición del Gobierno, propiciada y respaldada por los grupos más reaccionarios de la derecha económica, política y militar; esta represión continuada, sangrienta, plena de furia y de injusticia, en vez de reprimir la fuerza de las organizaciones populares y de los grupos guerrilleros, lo que está promoviendo es su robustecimiento y multiplicación. El recrudecimiento de la represión con su secuela de atemorización, tortura y asesinatos, no ha debilitado a las organizaciones populares, sino que al contrario las ha robustecido y exacerbado. Y mucho menos ha debilitado a los grupos guerrilleros, que apenas son tocados por la acción de los cuerpos de seguridad. Puede asumirse, además, que una ulterior agudización e incluso el mantenimiento de los niveles actuales de la represión, llevaría a una insurrección generalizada, en la que ambas partes en conflicto contarían con ayuda de fuera del país, lo cual convertiría a este pequeño trozo de tierra superpoblado en un lago de sangre con resultados políticos desastrosos. Hoy ya no puede esperarse que una represión como la de 1932 cause los mismos efectos de sumisión y de aplastamiento.*

*¿Que propone el Gobierno para que esto no llegue a ocurrir? Propuso un diálogo nacional y está proponiendo —en lo cual le respaldan los Estados Unidos— elecciones libres que darían paso a un régimen democrático con respaldo popular. Pero no vemos que el Gobierno se proponga seriamente frenar la represión. Parece, por el contrario, que la represión le es exigida por la derecha como hipoteca indispensable para permitir la apertura democrática. Tanto el Gobierno como la derecha extrema que le respalda, piensan que sólo se puede iniciar la democratización cuando se haya llegado a la aniquilación de las organizaciones populares, aunque esto suponga un baño de sangre con una cuota de miles de asesinatos por año.*





*Pero el Gobierno debería reflexionar en que son muchos los que no le siguen en su proyecto de elecciones, así como han sido muchos —los más— los que no le han seguido en su propuesta fracasada de diálogo nacional. El Gobierno se engañaría a sí mismo, si creyera que en el Foro Nacional han participado los partidos, los sindicatos, las universidades, las iglesias, etc. Evidentemente no ha sido así. Los que han ido al Foro Nacional de los partidos, de los sindicatos, de las universidades, de las iglesias, etc., no son en manera alguna representativos de esas fuerzas sociales y, mucho menos, de las fuerzas populares. La causa fundamental por la que no acudieran a la invitación presidencial al Foro muchas de las fuerzas sociales más significativas, fue por no querer contribuir a la legitimación de un Gobierno, que cada vez cuenta con menor credibilidad y, al mismo tiempo, por no querer respaldar ni siquiera indirectamente a quien por acción o por omisión se considera responsable de gravísimos actos de represión popular.*

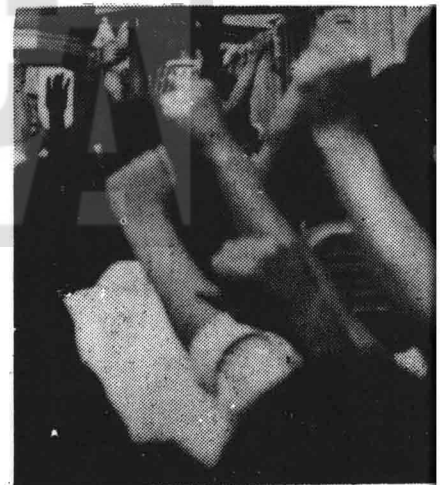
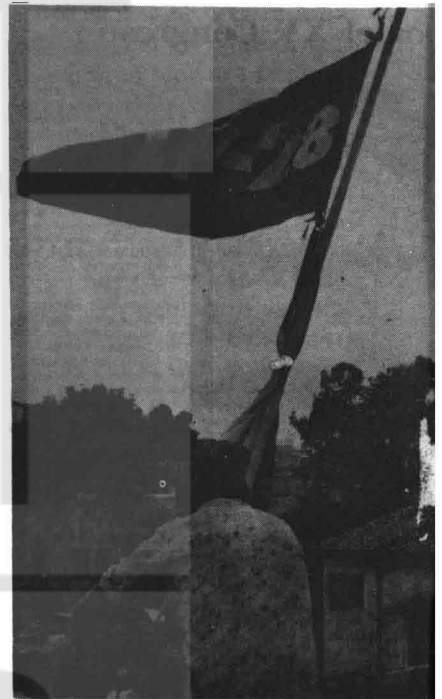
*Algo semejante está ocurriendo con la oferta de elecciones libres. La oferta está propuesta por un Gobierno, cuyo discurso puramente verbal se ve desmentido cada día por la realidad de los hechos nacionales. No es sólo la vaga persuasión general de que no cuenta con suficiente respaldo para hacer efectivo lo que dice querer hacer, sino sobre todo es la verificación cotidiana de unas prácticas represivas, bárbaras e irracionales, que desmienten cualquier propósito serio de democratización.*

*Cabe, por tanto, preguntarse, si el actual Gobierno y las fuerzas que lo respaldan, en vez de caminar hacia una solución, la están haciendo cada día más difícil y costosa. Día a día se hace más aguda y generalizada la sospecha de que el Gobierno no está en capacidad de propiciar cambios de alguna importancia e incluso no está en capacidad de propiciar la transición hacia nuevos gobernantes y hacia la presencia en el poder de aquellas fuerzas sociales que podrían emprender el camino de la radical transformación que necesita El Salvador. Y esto último, en caso de confirmarse, hace todavía más sombrío el horizonte, pues deja sin salida aceptable la amenaza de una cruenta guerra civil.*

*Hemos llegado, por tanto, a un momento en que el país y las fuerzas sociales deben preguntarse seriamente no sólo qué es lo que ha de hacerse sino también quiénes lo pueden hacer.*

*Hay una serie de medidas inaplazables, entre las que la más urgente para evitar la espiral de la guerra civil es el cese de la represión, el cese de la violencia gubernamental y paragubernamental, que está produciendo efectos contrarios a los que dice pretender. Sin este cese de la represión, sin este poner freno a los cuerpos de seguridad y a las bandas armadas de derecha en su cuota diaria de sangre, no es posible avanzar. Lo que aquí se plantea es algo no solamente justo, no solamente requerido y exigido por la Constitución y las leyes, sino algo que parece también indispensable desde un punto de vista político.*

*Si ni siquiera esto puede garantizar el Gobierno, si ni siquiera puede frenar este aluvión creciente de muertes, el Gobierno quedará despojado de toda credibilidad y, lo que es peor, de toda legitimidad. Tal vez pueda dársele todavía el be-*





neficio de la duda en este solo punto, pero por poco tiempo. Si en este escaso margen de tiempo lograra hacer bajar sustancialmente el nivel del asesinato político, sobre todo el directamente atribuible a los cuerpos de seguridad, pero también el disfrazado con apariencias de presunta, pero dudosa autonomía, podría demostrar que cuenta aún con alguna posibilidad de mantenerse en el poder con algún respaldo y de propiciar algunos de los pasos iniciales de una transición impostergable. Aunque el Gobierno y las actuales fuerzas en el poder no son quienes pueden sacar al país de la crisis, podrían contribuir, caso de darse aquella condición *sine qua non*, a preparar la llegada de quienes tuvieran más probabilidades de hacerlo.

El intento de controlar la situación de violencia con más violencia y represión por parte del Gobierno sería un trágico error. Eso es lo que ha estado intentando durante largos meses con serio fracaso ético y político. Con fracaso ético por cuanto se han cometido acciones represivas y asesinatos carentes de toda justificación y condenados por la ciudadanía responsable; con fracaso político por cuanto se han ido fortaleciendo los grupos guerrilleros y se han multiplicado las acciones vindicativas. Es presumible, por otra parte, que un intento renovado y agudizado de represión sería el detonante de una magna insurrección popular con costos altísimos, probablemente mayores que los de 1932 y sin la paz de los cementerios, que se siguió tras aquella masacre.

¿Serían, entonces, las organizaciones populares quienes podrían tomar el mando del país? Las organizaciones populares han obligado al país a enfrentarse con su trágica situación estructural, han concientizado y dado cuerpo no sólo a la protesta popular sino a la fuerza popular; han luchado duramente por los intereses populares y están empezando a forzar medidas de profundas transformaciones sociales. Lo que sin ellas era urgencia ética ineficaz, comienza a ser con ellas forzosidad política, necesidad histórica. Que lo hayan hecho a veces por caminos violentos no borra lo que de fundamentalmente positivo ha tenido su empresa; máxime que esos caminos violentos han sido con frecuencia respuesta a una represión, que nunca ha comprendido el derecho que asiste a las clases populares a organizarse y defenderse activamente. Tampoco conviene olvidar que va a más la fuerza social de estas organizaciones populares, de modo que representan en la actualidad una fuerza significativa, sin cuya participación toda labor de Gobierno sería irreal y plagada de dificultades.

Pero no por ello se puede asegurar que sean las organizaciones populares las que puedan tomar de inmediato el mando del país. Su interna división, que muestra un cierto grado de inmadurez política junto con la correlación de fuerzas dentro y fuera de El Salvador no parece que hagan probable su toma del poder. Una cosa es que sin ellas este país resulte ingobernable de hecho y de derecho, y otra que ellas solas puedan y deban gobernarlo. Ni representan a todo el pueblo —problemas de derecho— ni cuentan con suficiente fuerza como para aniquilar a los demás sectores —problema de hecho—. Todo ello lleva a la conclusión



*de que deben participar eficazmente en el poder político y en el poder económico, de tal manera que esa participación lleve a cambios importantes de índole estructural. Pero sería prematuro pretender mucho más.*

*No abrir caminos reales y rápidos para lograr el cese de la represión y el ingreso de las organizaciones populares en el ámbito del poder político y económico supondría el abocarse a una guerra civil declarada que sustituyese y extremase la guerra civil latente, que ya se está dando, al menos en lo que toca al número de víctimas y a los procedimientos de lucha. Guerra que convertiría en decenas de miles los muertos lo que ahora son centenas de asesinatos. Y esto es lo que se debiera impedir por todos los medios. Hay que arbitrar una transición que nos separe radicalmente de la situación en la que estamos y que nos conduzca a una plataforma democrática. Esa transición no la representan ni el foro nacional ni la promesa de elecciones.*

*No vamos a discutir aquí qué nivel de hecho y qué nivel de derecho hay o puede haber en el futuro para una insurrección popular. Si todavía es tiempo, hay que hacer todo lo posible por evitarlo. Pero el modo de evitarlo no es la fuerza, no es la sangre de la represión sino el empezar a dar realidad irreversible a lo que de justo tiene o puede tener la forzosidad histórica de una insurrección. No se trata de evitar la insurrección con el objeto de que no llegue a darse lo que los insurreccionistas proponen, sino con el objeto de evitar el desenfreno de la violencia y el riesgo mortal del fracaso. ¿Será entonces posible establecer mecanismos que den a las organizaciones populares, sin pasar por la insurrección popular sangrienta, el lugar que les corresponde en la conducción del Estado? ¿Será posible que las organizaciones populares admitan un proceso progresivo, que responda realmente a la correlación de fuerzas externas e internas? ¿Será posible que el resto de las fuerzas sociales aislen el extremismo de derecha y logren con las organizaciones populares una plataforma política similar a la propuesta por la Junta de Gobierno nicaragüense, de modo que se vaya transfiriendo el poder económico y político de quienes hoy lo detentan a las mayorías democráticas de la nación? Y, sobre todo, pregúntese: ¿hay otro modo realista y justo de evitar una catastrófica guerra civil en El Salvador?*

*Sólo quien asegure ya la posibilidad efectiva de drásticos cambios en la conducción política y de profundas transformaciones en la estructura económica tendrá credibilidad y legitimidad suficientes para poder conducir el Estado en esta difícilísima situación.*

*15 -Septiembre- 1979.*